



Entrego el
14/06/2011

RESOLUCIÓN No. **7 2 6 7**

"POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

EL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRICTAL DE AMBIENTE

En ejercicio de las facultades delegadas mediante la Resolución No. 3691 del 13 de Mayo de 2009, en concordancia con lo establecido en el Decreto Distrital 109 del 16 de Marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 del 4 de Mayo de 2009, el Acuerdo Distrital 257 del 30 de Noviembre de 2006, conforme a la ley 99 de 1993, el Decreto 1594 de 1984, el Decreto 948 de 1995 y la Resolución 627 de 2006 del MAVDT y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante concepto técnico de ruido No. 7279 del 3 de Octubre de 2006, el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – Subdirección Ambiental Sectorial – DAMA hoy Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, concluyó que durante el desarrollo del Espectáculo público Concierto "LOS NUMERO UNO DEL REGGETON" llevado a cabo el día 1º de Septiembre de 2006 en la plaza de toros La Santamaría, se logró establecer que los niveles sonoros obtenidos incumplieron con los valores de referencia normativa establecidos en Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial para un uso de suelo residencial, obrante a folios 1 al 5 del expediente **DM-08-2007-328**.

Que conforme a lo anterior la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, mediante Resolución No. 0278 del 20 de Febrero de 2007, abrió investigación Administrativa sancionatoria de carácter ambiental al Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD. Con NIT 860062099-1, por la presunta violación a la normatividad ambiental vigente durante el evento celebrado el 1º de septiembre de 2006 en la plaza de toros La Santamaría ubicada en la Carrera 6 No. 26 -50, concretamente en lo relacionado con lo establecido en los artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995 y el artículo 9 de la Resolución 627 de 2006,





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
AMBIENTE

7 2 6 7

toda vez que los niveles medios de presión sonora sobrepasaron los niveles máximos permitidos para zona Residencial y formuló cargos al **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE – IDRD-** así:

"Cargo Primero: Presuntamente por no haber dado cumplimiento al artículo 45 del Decreto 948 de 1995.

Cargo Segundo: Presuntamente por no haber dado cumplimiento al artículo 51 del Decreto 948 de 1995.

Cargo Tercero: Presuntamente por no haber dado cumplimiento al artículo 9º de la Resolución 627 de 2006."

Que la Resolución No. 0278 del Veinte (20) de Febrero de 2007, fue notificada mediante apoderado el **Dr. LUIS PEREZ JANICA** identificado con Cédula Ciudadanía No. 17.078.799 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 6640 del C.S. da la J.

Que mediante radicado 2007ER50685 el apoderado del presunto infractor, el Dr. LUIS PEREZ JANICA presentó escrito de descargos en contra de la resolución No. 0278 del 20 de Febrero de 2007, en donde pone de manifiesto entre otras consideraciones que: *" Como se desprende de los hechos señalados, el concepto técnico No 7279 de 03 de octubre de 2006, sirve de fundamento para establecer violaciones a la normatividad vigente en materia de ruido, referido a un mismo evento que, de acuerdo con la Resolución 0278 de 20 de febrero de 2007, se realizó simultáneamente en tres escenarios distintos (Parqueadero Salitre Mágico, Plaza de Toros La Sanatamaría y el Campín, el mismo día.*

Lo anterior demuestra con toda claridad que la Resolución aludida carece de claridad y precisión, lo cual constituye una circunstancia invalidante de la misma como lo ha reconocido la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, referida a la interpretación del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, que en su parte pertinente expresa: "Pero también se tiene como un axioma jurídico en nuestro derecho que no basta la existencia de un motivo para justificar el acto administrativo sino que éste debe ser real y serio, adecuado o suficiente e intimidante relacionado con la decisión, es decir, tener capacidad para justificarlo dentro de la idea de satisfacer el interés general o público, para lo cual se han dado las competencias administrativas" ..."
(...)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de conformidad con las disposiciones Constitucionales en especial, las señaladas en el artículo 8º, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, en concordancia con el





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
AMBIENTE

7267

artículo 79 *Ibíd*em, que contempla el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y establece para el Estado, entre otros, el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 Constitucional, le asigna al Estado el imperativo de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, generando desarrollo sostenible, conservación y restauración o sustitución de estos. Atribuye también como responsabilidad estatal la prevención y control de agentes de deterioro ambiental, y que en cuyo caso, se configura la potestad sancionatoria como un mecanismo de protección frente al quebrantamiento de normas ambientales, y que consecuentemente hace exigible el resarcimiento de los daños originados.

Que de acuerdo con las disposiciones Constitucionales, nace para el Estado, la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y la diversidad e integridad del ambiente, por cuanto, la carta política de Colombia, prevé el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, correspondiéndole planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, *"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio"*, y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que adicionalmente, dentro de las garantías constitucionales del debido proceso sancionador, cobran especial importancia los principios de igualdad, celeridad y caducidad de la acción, que imponen a la administración, el deber de actuar diligentemente y preservar las garantías de quienes resultan investigados; es así como, la caducidad tiene por objeto, fijar un límite en el tiempo para el ejercicio de ciertas acciones, en protección de la seguridad jurídica y el interés general.

Que de acuerdo al concepto técnico de ruido No. 7279 del 3 de Octubre de 2006, anteriormente relacionado, se concluyó que, de acuerdo con los resultados de la evaluación tomados antes y durante del desarrollo del evento,





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
AMBIENTE

№ 7267

se logró establecer que los niveles sonoros obtenidos incumplieron con los valores de referencia normativa establecidos en Resolución 0627 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial para un uso de suelo **RESIDENCIAL** en el horario Diurno y Nocturno.

Que el Decreto 1594 de 1984, define el proceso sancionatorio en los artículos 197 y siguientes, no obstante dicho régimen no contiene la figura de la caducidad administrativa, razón por la cual y, frente al vacío de la norma, nos remitimos a lo dispuesto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, el cual establece que: "*Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas*".

Que sobre esta materia, vale la pena recalcar la posición del H. Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 4438, MP. Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, frente a la caducidad relacionada con el hecho puntual en el tiempo y el transcurso del mismo por más de los tres (3) años a que se refiere el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

(...) "Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones que no sean solo el transcurso del tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la Ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable, debe interpretarse que teniendo en cuenta las normas que dicta el Legislador deben producir los efectos en ellas previstos, y en tal sentido, cuando se hace referencia a la caducidad de la acción prevé el ejercicio de la autoridad administrativa en la medida que también produzca efectos en derecho, es decir, mediante la expedición dentro del término de tres años previsto de manera general en la norma" (...).

Al respecto, el H. Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, donde se precisó:

*"(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, **por lo tanto el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor.**" (...)* (Resaltado fuera del texto original).

Que respecto al término establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de

BOG BOGOTÁ
POSITIVA
GOBIERNO DE LA CIUDAD





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
AMBIENTE

№ 7 2 6 7

Bogotá D. C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

(...) "Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: "
(...) *Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa..." (Subrayado fuera de texto).

Que así las cosas y, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo y, las instrucciones impartidas a través de la Directiva No. 007 de 2007 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se deduce que la administración, para el caso en concreto, disponía de un término de tres (3) años contados a partir de la fecha en que conoció del incumplimiento en los niveles de presión sonora, esto es, desde el **1º de Septiembre de 2006**, para la expedición del acto administrativo de sanción, su notificación y debida ejecutoria, trámite que no se surtió, operando de esta manera el fenómeno de la caducidad.

Que, siendo la caducidad, una institución de orden público, a través de la cual el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda, que su declaración proceda de oficio, por cuanto, al continuar el proceso, este culminaría con un acto viciado de nulidad, por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite.

Que en igual sentido, el Doctrinante Luís Alfonso Acevedo Prada, en su obra "Caducidad, Prescripción, Perención, Preclusión y Términos" Primera edición 2004, expreso al respecto de la caducidad lo siguiente:

(...) "Ahora bien, en la caducidad ocurre que proceden sus efectos ope legis o de pleno derecho, sin necesidad de que el interesado en beneficio de sus efectos la alegue o proponga como defensa ~~exceptiva. El funcionario competente en el juzgamiento~~





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
AMBIENTE

№ 7 2 6 7

pertinente, no solo debe sino que esta obligado a declararla sin necesidad de petición de parte" (...)

Que a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, a la que se le asignó entre otras funciones, la de ejecutar el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, e implementar las acciones de policía que sean pertinentes para el efecto.

Que de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 1 de la Resolución No. 3691 del 13 de Mayo de 2009, proferida por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, mediante la cual se efectúan unas delegaciones a la Dirección de Control Ambiental, le corresponde expedir los actos administrativos que resuelvan procedimientos de carácter convencional y sancionatorio que se adelanten como consecuencia de la violación de las normas sobre protección ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y en consecuencia, ésta Dirección de Control Ambiental, competente en el caso objeto de estudio.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el proceso sancionatorio iniciado por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, contenido en el expediente **DM-08-2007-328**, en contra del **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD** en cabeza de su representante legal o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las presentes diligencias, como consecuencia de lo previsto en el artículo primero de la presente providencia.

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia al representante legal del **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD** o quien haga sus veces, en la Calle 63 No. 47 -06 Teléfono 6605400.

ARTICULO CUARTO: Enviar copia de la presente Resolución a la oficina de Control de Calidad de Aire, Auditiva y Visual de la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de esta Secretaría para lo de su competencia.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
AMBIENTE

№ 7 2 6 7

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente Resolución a la Subsecretaría General y de control Disciplinario de esta Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, para lo de su competencia.

ARTICULO SEXTO: Publicar la presente Resolución en el boletín ambiental. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno conforme lo establecido en el Artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los

25 NOV 2010

GERMÁN DARIÓ ÁLVAREZ LUCERO

Director de Control Ambiental

Proyectó.- SANDRA MEJÍA ARIAS
Revisó.- Dr. Oscar Tolosa
Expediente DM-08-2007-328.



NOTIFICACION PERSONAL

En Bogotá D.C., a los 31 MAR 2011 () días del mes de _____ del año (20__), se notifica personalmente el contenido de Resolución No 7267 / 2010 a señor (a) Luis Humberto Pérez Jiménez en su calidad de Apoderado

Identificada (s) con Cédula de Ciudadanía No. 17078 779 de Bogotá, T.R. No. 6640 del C.S.J. quien fue informado (s) que para esta decisión no procede ningún recurso

EL NOTIFICADO EN: Mirabeles
Dirección: Calle 63 N° 47-06
Teléfono (s): 631-1830

QUIEN NOTIFICA: Carlos Julio Lara

CONSTANCIA DE EJECUTORIA

En Bogotá, D.C., hoy 7-01-11 a las _____ horas de _____ del año (20__), se certifica en conformidad de que la presente providencia se encuentra ejecutoriada y en firme.

Quevedo
FUNCIONARIO / CONTRATISTA